



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
RIOHACHA – LA GUAJIRA
SALA CIVIL FAMILIA LABORAL.**

RIOHACHA, SEIS (6) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ROBERTO ORTIZ ARCINIEGAS.

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO.
DEMANDANTE:	DAYNES TOMASA FONTALVO BLANCHAR
DEMANDADO:	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA SAS y E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II.
DESPACHO DE ORIGEN:	JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.
TEMA:	IMPEDIMENTO.
RADICACION;	44-650-31-05-001-2023-00091-01

Discutido y aprobado en Sala, según **Acta No. 012** del seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

1.- ASUNTO POR DECIDIR.

Ha llegado a conocimiento de esta Corporación el día 28 de febrero de 2024¹, el proceso de la referencia, con el fin de resolver el impedimento manifestado por el señor Juez Laboral del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira).

2.- ANTECEDENTES

Daynes Tomasa Fontalvo Blanchar, por conducto de su apoderada judicial, demandó mediante un proceso ordinario laboral a Servicios Empresariales de la Península S.A.S. (Liquidada), y el E.S.E Hospital San Rafael, para que se ordene su reintegro y reubicación, teniendo en cuenta las patologías que le aquejan, así como el pago de salarios demás prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculada.

Dicha demanda fue asignada por reparto el día 1º de agosto de 2023², al Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira), quien se declaró impedido en providencia calendada 16 de agosto de 2023³, con fundamento en los numerales 1, 3 y 9 del artículo 141 del C.G P., aseverando que su sobrina María Isabel Gonzales Suarez, es la gerente de la demandada ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II.

¹Pdf. 01

² Pdf. 02

³ Pdf. 03

3.- CONSIDERACIONES

El impedimento es un instrumento para la exclusión del funcionario de determinados asuntos a él asignados, por la concurrencia de ciertas circunstancias taxativamente establecidas en la ley, que tienen aptitud suficiente para influir en sus decisiones, con el objeto de conseguir una de las finalidades pretendidas por el trámite procesal, esto es, una decisión imparcial, ecuaníme, objetiva y recta, a partir de asegurar que los juzgadores únicamente estén sujetos a la Constitución y las Leyes.

La declaración de impedimento de un funcionario judicial se caracteriza por ser un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio ante la presencia de cualquiera de los supuestos de exclusión que se encuentra regida por la taxatividad de las causales de impedimento y por su debida fundamentación.

De lo anterior emerge entonces que, la independencia e imparcialidad son atributos de los funcionarios judiciales, orientados a salvaguardar los principios esenciales de la administración pública. La imparcialidad judicial es un principio constitucional fundamental determinante en el ejercicio de la administración de justicia y cobija el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa.

Por tal razón, el legislador estableció el impedimento y la recusación, según sea quien lo alegue; en el primero, el funcionario judicial por iniciativa propia lo plantea al considerarse incurso en una o varias causales; y, la segunda, viene de las partes cuando estiman que el encargado de administrar justicia no es prenda de garantía y le solicitan se separe del conocimiento del caso.

Así el artículo 141 del C.G.P., señala que los impedimentos son las causales consagradas como las de recusación, así:

“Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

- 1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.*
- 2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.*
- 3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.*
- 4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes.*
- 5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.*

6. *Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.*

7. *Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación.*

8. *Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal.*

9. *Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.*

10. *Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público.*

11. *Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas.*

12. *Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.*

13. *Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso.*

14. *Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.”*

Sobre el punto, la Sala de Casación Civil del H. Corte Suprema de Justicia, en auto del 13 de enero de 2010, siendo Magistrado Ponente el doctor Cesar Julio Valencia Copete, señaló:

“(...) es el mecanismo jurídico procesal que el legislador otorgó a los jueces para que estos se declaren separados de conocimiento de determinado proceso, cuando quiera que su objetividad para adelantar con el máximo de equilibrio se encuentre afectada, ya sea por razones de afecto, interés, animadversión o amor propio”.

También la Corte Constitucional en sentencia C-496 de 2016 expuso:

“La Corte ha explicado claramente la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad en los siguientes términos: “[la] independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, [...] a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales”. Sobre la imparcialidad, ha señalado que esta “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”.

Entonces, el propósito de este instituto es garantizar la eficacia del derecho, que tienen todos los ciudadanos a ser juzgados por un juez imparcial.

Como se dijo, el funcionario esgrime, entre otras, como causal sobre la cual cimienta su impedimento, la contemplada en el numeral 3 del artículo 141 del Código General del Proceso, que reza: *“Son causales de recusación las siguientes: (...) 3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad”.*

Respecto a la causal de impedimento del ordinal 3º, ha enseñado la doctrina colombiana que, en ésta se combinan razones de afecto y de interés fundadas en el parentesco, por lo que la ley establece que cuando el juez o su cónyuge están en relación de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con alguna de las partes, su representante o apoderado, no está aquél en capacidad de conocer del negocio, pues esas vinculaciones familiares le restarán la objetividad e imparcialidad que requiere; así se trate del más probo de los funcionarios, es natural que se incline a favorecer los intereses de alguno de sus parientes vinculados al juicio, o, en caso de que así no sucediera, por lo menos sería molesto para el funcionario conocer de un proceso, por la sospecha que existiría acerca de la actuación.

La declaración de impedimento del juez de conocimiento, doctor Nancio León González Jiménez, tiene como fundamento que la señora María Isabel González Suarez es la representante de la demandada ESE Hospital San Rafael Nivel II, se encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad y por tanto le asisten razones serias y atendibles para no conocer del proceso ordinario adelantado contra dicha entidad.

Además de la manifestación que bajo la buena fe rindió el funcionario judicial, se observa en la página oficial de la precitada entidad demandada, en efecto aparece como representante legal de esta la señora María Isabel González

Suarez⁴, tal y como se aprecia con la siguiente imagen:

ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira.

La E.S.E Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira; es una Entidad de orden Departamental creada por decreto No.203 de 1992 como establecimiento público y como Empresa Social del Estado por la Ordenanza No. 017 de 1994 complementada por la Ordenanza 059 de 1996.

Somos el Hospital de referencia del sur del Departamento de La Guajira complementando los servicios de segundo y tercer nivel en los municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Estamos ubicados estratégicamente en la Cabecera del Municipio de San Juan del Cesar.

La E.S.E Hospital San Rafael Nivel II cuenta con una infraestructura física de pabellón horizontal y habitaciones confortables para los pacientes y sus familiares, con estándares adecuados en hotelería hospitalaria.

El servicio de Consulta Externa consta de un conjunto de servicios que apoya los procesos preventivos, curativos y de rehabilitación de los usuarios, se encuentra ubicado en el Centro de Bienestar Social "Casa del Abuelo", salida a los Ponderos.

Los servicios de primer nivel o de baja complejidad, (Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad) se prestan en el Centro de Salud ubicado en el barrio 20 de julio de este mismo municipio, además, de los veintidós puestos de salud en toda la zona rural y con los equipos de salud extramural se prestan servicios a las comunidades de forma domiciliaria.

La gerencia de la E.S.E está a cargo de la Dra. María Isabel Cristina González Suárez, nombrada mediante Decreto 103 de 2020, emanado de la Gobernación del Departamento La Guajira.

Lo anterior, permite afirmar que se encuentra configurada la causal de impedimento contenida en el numeral 3º del artículo 141 del CGP.

En este orden de ideas, es procedente desprender del conocimiento del asunto al referido funcionario en su calidad de Juez Laboral del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira), comoquiera que puede afectar su imparcialidad.

A la luz de lo dispuesto por el artículo 144 del C.G.P., el Juez que deba separarse del conocimiento por impedimento o recusación será reemplazado por el del mismo ramo y categoría que le siga en turno, atendiendo el orden numérico, y a falta de éste por el Juez de igual categoría, promiscuo o de otra especialidad que determine la Corporación respectiva.

En este caso, se asignará el conocimiento del presente asunto al Juzgado Laboral del Circuito de Riohacha - La Guajira (Reparto), para que continúe con el trámite del proceso.

En consecuencia, la Sala Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha La Guajira,

RESUELVE

⁴ <https://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/10-documentos-publicas/1-hospital-san-rafael-de-san-juan-del-cesar-guajira#>

PRIMERO. - ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Nancio León González Jiménez en su calidad de Juez Laboral del Circuito de San Juan (La Guajira), para conocer del proceso ordinario laboral de la referencia, conforme a lo indicado en la parte motiva.

SEGUNDO. - ASIGNAR el conocimiento del proceso ordinario laboral radicado bajo la partida 44-650-31-05-001-2023-00091-01, que adelanta Daynes Tomasa Fontalvo Blanchar contra servicios empresariales de la península SAS y E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II al JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA (REPARTO), quien deberá asumir su conocimiento.

TERCERO. - INFORMAR lo aquí decidido al Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira).

CUARTO. - Por Secretaría remítase en forma inmediata el proceso a los JUZGADOS LABORALES DEL CRICUITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA (REPARTO), para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

LUIS ROBERTO ORTIZ ARCINIEGAS

Magistrado Ponente

PAULINA LEONOR CABELLO CAMPO

Magistrada

HENRY DE JESÚS CALDERÓN RAUDALES

Magistrado

Firmado Por:

Luis Roberto Ortiz Arciniegas

Magistrado

Sala Civil Familia Laboral

Tribunal Superior De Riohacha - La Guajira

Henry De Jesus Calderon Raudales
Magistrado
Sala Despacho 003 Civil Familia Laboral
Tribunal Superior De Riohacha - La Guajira

Paulina Leonor Cabello Campo
Magistrado
Sala 001 Civil Familia Laboral
Tribunal Superior De Riohacha - La Guajira

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4a47f9e3be9422c14ce78643da23a6ffeef3c485b718ef7f75e3bae2c38480a8**

Documento generado en 06/03/2024 04:15:24 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>